

ALTERNATIVAS ANTE LA CRISIS ECONOMICA ESPAÑOLA.

Conferencia pronunciada en la Real Academia de Ciencias el 30 de mayo 2012.

Antoni Espasa, antoni.espasa@uc3m.es,

Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico, www.uc3m.es/biam, de la Universidad Carlos III de Madrid.

Para entender adecuadamente la situación económica española es necesario empezar enmarcándola en el contexto internacional. En 2008 empezó una crisis financiera, debida en gran parte a malas prácticas y a cierta corrupción de lo que se consideraba la élite financiera internacional, unida a una ineptitud o dejación de responsabilidades de las entidades reguladoras y de las agencias de calificación. Pronto la situación financiera dio paso también a una crisis crediticia que redujo la producción y paralizó la demanda, generándose así la mayor crisis económica desde 1929. La intensidad y duración de la crisis está siendo diferente según los países. Así en los países emergentes la crisis ha sido suave o inexistente y en los países desarrollados su impacto está dependiendo del nivel de endeudamiento de las economías y de la estructura de su sistema productivo, siendo sus efectos realmente graves en las economías que tenían un sector de la construcción con fuerte expansión basada en la facilidad de crédito y en la expectativa de un precio creciente de los inmuebles. Este ha sido claramente el caso español, donde han aparecido también importantes casos de corrupción en el sector inmobiliario.

La crisis actual se ha ido desarrollando desde su comienzo con características más complejas que en otras crisis anteriores por haber aparecido en un contexto de globalización y de un fuerte impacto tecnológico con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

En el caso europeo la crisis ha aparecido tras diez años de existencia de una unión monetaria y económica el EMU. La globalización y las nuevas tecnologías propiciaban mayor competencia y venían presionando ya durante años sobre la necesidad de cambios importantes en las economías nacionales, obligando a estructurar sus sistemas económicos sobre una base de mayor productividad que concluyese en mayor competitividad a nivel internacional. Esto requería cambios en las economías nacionales que con anterioridad a la crisis se estaban implementando a velocidades diferentes en los distintos países. De nuevo aquéllos que estaban experimentando un fuerte crecimiento económico con una base excesiva en el sector de la construcción, fueron los países que se vieron menos motivados para introducir cambios estructurales y en los que el capital

tenía menos incentivos para buscar planes de negocios en nuevos productos basados en la innovación, la tecnología y en una organización más eficiente de la producción y su distribución. Esta fue también la situación de la economía española. Por tanto, una primera conclusión es que la crisis no se centra en ni viene exclusivamente determinada por el sector de la construcción, sino que es algo que se gestó durante años en muchos sectores productivos españoles y que se puso de manifiesto con toda crudeza con la crisis financiero-crediticia internacional.

La situación sobre la deuda pública griega ha desencadenado un problema sin precedentes sobre las deudas soberanas en varios países de la euro área, que ha agudizado la crisis en la que estos países estábamos inmersos. Con todo ello se ha ido originando una crisis bancaria europea, que en España –país con unas cajas de ahorro muy vinculadas a los créditos hipotecarios y con fuertes servidumbres con los poderes políticos locales en su concesión de créditos- ha adquirido una magnitud tan enorme, que existen muy serias dudas a nivel internacional de que España pueda resolver la grave situación de su sector bancario sin acudir a la ayuda europea. Con todo ello, la magnitud de la crisis bancaria de la euro área en el futuro próximo es todavía muy incierta y podría generar una nueva recesión mundial, resultado que preocupa muy seriamente en otros países como EE UU. De nuevo España se encuentra entre los países más afectados por una crisis en su deuda soberana y en su sistema bancario.

Hay que añadir también que se trata de una crisis internacional en la que las estructuras económico-políticas para abordarla adecuadamente no existen y tampoco hay ideas claras, consenso ni voluntad para crearlas. La escalada de la economía china con todo su potencial presente y sobre todo de futuro, ha roto los equilibrios de poder existentes anteriormente y está generando un desplazamiento de los centros de poder económico, que no se quiere reconocer, retrasando la consecución de nuevos equilibrios internacionales. Todo esto añade más incertidumbre al sistema.

El problema presente se caracteriza por el hecho de que las expectativas sobre el futuro se mantiene con firmeza el fantasma de la crisis. La cuestión está en que el auténtico fin de la crisis se logra cuando se recupera el empleo perdido y el mercado de trabajo alcanza una nueva situación de estabilidad o crecimiento equilibrado. Pero esto está todavía se ve lejano en el tiempo, incluso en los países que mantienen actualmente la recuperación que se dio en 2010 y 2011. Así, para EE UU las previsiones de consenso sobre las tasas de su crecimiento económico están alrededor del 2.5% para el bienio 2012-2013, pero con unas expectativas de tasas de paro alrededor del 8%. Para la euro área las expectativas son peores y, así, las predicciones sobre su economía, según el Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico (BIAM) del Instituto

Flores de Lemus de la Universidad Carlos III, son de un crecimiento nulo en 2012 y de una tasa de paro alrededor del 10.5%. En 2013 podría experimentarse un crecimiento del PIB sobre el 0.6%, pero con una mínima reducción de la tasa de paro. En el detalle por países se tiene que varios de ellos han entrado ya en una segunda recesión y registrarán decrecimiento en las tasas anuales medias de sus correspondientes PIBs.

Todo lo anterior pone también de manifiesto que en cada país los efectos de la crisis están siendo muy diferentes entre la población y está aumentando la desigualdad, entre otras cosas por el elevado número de personas en paro. Además con el fin de evitar males mayores se han socializado gran parte de las pérdidas de muchas instituciones privadas y todo ello podría generar una contestación social que por el momento apenas ha aflorado. Pero en este punto el futuro es incierto. De nuevo, sobre este tema tampoco se tienen planes sobre cómo distribuir las cargas de la crisis, que en algunos países como España van a ser muy duras. Se espera que el número de parados a finales de 2013 esté alrededor de 5.93 millones de personas. La lógica del sistema capitalista no incluye, por su propia esencia, criterios de reparto equitativo en las fases de auge económico ni en las depresiones. En las primeras el problema social ni siquiera aparece en los países desarrollados, pues todos se benefician del crecimiento económico. Sin embargo, en las crisis el retroceso económico y de bienestar también se reparte de forma muy desigual y, como ha ocurrido en esta ocasión, el reparto de las cargas tampoco se ha correspondido con las responsabilidades por la generación de la crisis, lo cual en cierta forma va en contra de la lógica capitalista de que el ineficiente es expulsado del sistema. La cuestión radica que en las etapas de expansión económica las instituciones que crean crecimiento son las más beneficiadas, aunque ese crecimiento sea transitorio y esté sentando las bases para una subsiguiente depresión. Cuando ésta llega el sistema económico depende del mantenimiento de las instituciones económicas, ciertamente la financiera, y surge la necesidad de apoyarlas públicamente aunque tengan una responsabilidad notoria en la gestación de la crisis. Esta experiencia tan penosa a lo largo de la presente crisis pone de manifiesto la necesidad de aumentar los mecanismos reguladores dentro del sistema capitalista. Con la globalización económica es necesario también que la regulación sea global, pero eso requiere aunar posiciones diferentes entre países poderosos que por el momento resulta extraordinariamente difícil.

Como comentaremos más adelante para la salida de la crisis se necesitará una unión social fuerte y esta será difícil de alcanzar si no se desarrolla una cultura de exigencia de responsabilidades. La falta de equidad en el reparto entre los ciudadanos de los costes de la crisis genera descontento e irritación entre los que más la sufren sin haber intervenido en su generación. Una medida que

aparece como necesaria para paliar la crispación social es que se establezca el principio de exigir responsabilidades, no sólo por comportamientos corruptos sino también por malas prácticas en la gestión que luego causan enormes costes sociales.

En conclusión, la crisis actual se caracteriza por ser una crisis crediticia que ha generado una enorme aversión al riesgo y ha reducido el flujo crediticio para la producción y la demanda, en medio de una situación económica que a nivel de estado viene exigiendo cambios en el sistema productivo que permitan a las economías concretas asegurarse una posición competitiva. Aquellas economías como la española en las que estos cambios se estaban dando con excesiva lentitud se encuentran en la necesidad de abordarlos, pero ahora no tienen acceso al crédito, con lo que sus perspectivas de crecimiento se ven muy amortiguadas y eso a su vez reduce sus posibilidades de crédito. Todo esto ocurre en un contexto social en donde las consecuencias de la crisis, que va a ser larga, se reparten con enorme desigualdad.

En la euro área Grecia, Irlanda y Portugal se encuentran ya en una situación de quiebra y han necesitado ser rescatados por la EMU y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, al menos en el caso griego es claro que el rescate realizado es insuficiente y hay que actuar de nuevo y con cantidades elevadas de recursos. Pero aquí tampoco hay consenso sobre cómo proceder. Probablemente, y a pesar de las afirmaciones públicas en contrario, no está decidido si se permite o no la salida de la euro área a la economía griega. La cuestión es que el tratamiento adecuado está en dos extremos que nadie parece desear. Que salgan del EMU los países que no son solventes o crear una Unión Económica y Monetaria con más poder –que han de ceder los estados miembros- sobre temas financieros y fiscales. Lo que parece claro es que la situación actual no es sostenible. Las dos alternativas tienen costes inmensos para todos y los países protagonistas implicados están realizando en profundidad los cálculos de los costes de ambas alternativas. Mientras tanto se está desarrollando una especie de juego –no en vano la Teoría de Juegos es una pieza importante en Economía- entre la Comisión Europea, muy dirigida hasta el momento por Alemania, y Grecia, en el que un jugador, la comisión, quiere convencer al otro, Grecia, de que su propuesta consistente en que si no cumplen los tratados tendrán que salir de la EMU es inalterable. Mientras que Grecia actúa con la convicción de que tal amenaza no se cumplirá. Todo esto ha cambiado por completo el panorama de la economía en la euro área y ha establecido dudas serias sobre la continuidad del euro. La posibilidad de la ruptura del euro ya se contempla en las estrategias de las empresas e instituciones. Todo este contexto de incertidumbre perjudica de forma especial a la economía española.

Durante algún tiempo en el último año, y tras las medidas tomadas por el anterior gobierno en mayo de 2010 parecía que a España se le consideraba fuera del grupo de países periféricos con gran riesgo de quiebra. Esto ha cambiado radicalmente en las últimas semanas al aparecer con la crisis de Bankia, que el sistema bancario español necesita de la aportación de mucho capital para su supervivencia, con lo que en muchos ámbitos internacionales se cree que será necesaria la intervención europea. Un camino ordenado para ello se podría encontrar en el anuncio de la Comisión Europea de esta mañana. En cualquier caso la desconfianza sobre la economía española es enorme. Además, los datos que España va aportando –como el cálculo del déficit público en 2011, 6, 8, 8.5 y 8,9%- reflejan correcciones continuadas que desacreditan nuestra imagen de país serio y responsable. El nuevo gobierno en lo que va de año ha aprobado un conjunto amplio de leyes y normas que recortan el gasto público y formulan reformas estructurales. El efecto de los recortes se debe apreciar en la magnitud de la contabilidad nacional, Consumo de las AA PP, que recoge los gastos de sueldos y salarios de los trabajadores en las AA PP y de compras de bienes y servicios. La caída trimestral media de dicha magnitud en los tres últimos trimestres de 2011 fue del 1.7%, sin embargo, en el primer trimestre de 2012 la caída fue solamente del 0.3%. Este dato puede ser revisado por el INE más adelante, pero por el momento es muy moderado en relación al objetivo del déficit. Por las predicciones macroeconómicas avanzadas por el ministro de economía no parece que el consumo público vaya a registrar una caída muy pronunciada en el segundo trimestre, lo que implica que el peso de la corrección del déficit tendrá que darse en el segundo semestre. La conclusión es que a pesar de las medidas legisladas, los hechos mencionados, así como la crisis bancaria, están aumentando la gran desconfianza existente sobre la economía española y es muy improbable que se cumpla el objetivo del 5.3% para el déficit, pudiendo ocurrir que el déficit en 2012 se sitúe más próximo al 8.9% de 2011 que al objetivo del 2012. De hecho esta mañana la Comisión ha anunciado que darán a España un año más, es decir hasta 2014, para cumplir el objetivo de déficit fijado en un 3%.

¿Cómo se logra que los inversores vuelvan a confiar en la economía española y no cobren una prima de riesgo país diferenciada del grueso de la EMU? Hay que demostrar dos cosas al mismo tiempo, que se será solvente y que se va a crecer de forma sostenible. Sobre lo primero se han hecho cosas, pero faltan muchas por hacer. Una básica es la necesidad de una conciencia social de que España puede quebrar y entrar en una situación de recesión bastante larga que sería muy penosa. La probabilidad de eso empieza ya a no ser pequeña como se creía hace algunos meses. Si se adquiere esta conciencia social de riesgo,

será fácil aunar voluntades para llevar a cabo las acciones necesarias para generar expectativas de solidez sobre nuestra economía.

Entre las acciones necesarias para demostrar nuestra solvencia está el intento de aproximarse al cumplimiento del plan de reducción del déficit público acordado con la Comisión Europea. Aquí el problema más grave se encuentra en los déficits de las CC AA. Las reducciones de tales déficits requerirán recortes presupuestarios que tendrán que afectar a servicios importantes. Su realización requeriría posibilidades de acuerdo entre los partidos políticos para consensuar los recortes, opción que no parece todavía posible en la situación actual. Como venimos diciendo en el Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico desde hace muchos meses, a la sociedad española le falta un activo importante para abordar la crisis actual: la posibilidad de lograr pactos entre los partidos políticos para consensuar las medidas de política económica penosas para la ciudadanía que son necesarias para salir de la crisis.

Aproximarse a una reducción del déficit público en la línea de lo convenido o de lo que se renegocie con la Comisión Europea en un contexto de bajo crecimiento, sin afectar a los servicios que configuran el bienestar social va a resultar imposible sin una reforma administrativa, para la cual de nuevo el pacto social es importante.

Para actuar sobre el otro desequilibrio importante de la economía española, el déficit de la balanza por cuenta corriente, las acciones son más complejas y se centran en un aumento de la competitividad a partir de ganancias importantes en la productividad.

Suponiendo que se lograsen corregir los desequilibrios presupuestarios, fiscal y exterior, todavía faltará, como he señalado antes, demostrar que también vamos a ser capaces de crecer de forma sostenible. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento? Hemos visto que según el BIAM se espera una tasa de decrecimiento anual medio del 1.5% (± 1.2) para 2012. Una tasa anual media como la mencionada es una media ponderada de las tasas trimestrales correspondientes a los trimestres del año corriente y del anterior. Por tanto, una visión más actualizada del crecimiento o decrecimiento económico se obtiene siguiendo las tasas trimestrales, es decir las tasas correspondientes a variaciones de un trimestre sobre el inmediato anterior. En el primer trimestre de este año el decrecimiento del PIB fue del 0.3% y se espera que vaya aumentando en magnitud hasta un 0.8% en la media del segundo semestre. Para 2013 se espera que las tasas trimestrales pasen a ser positivas pero casi cero, con un valor medio de 0.1%. Con ello para la media anual de 2013 se predice un decrecimiento del 0.9% (± 1.7). En tasas anuales medias los crecimientos no se esperan hasta 2014, que podría ser un año de transición

hasta alcanzar un crecimiento más sostenido en años posteriores. Si tal crecimiento fuese del 1.8%, no sería hasta principios de 2017 cuando se recobraría el nivel del PIB en términos reales que se obtuvo en el máximo histórico anterior a finales de 2007. Es decir, puede pensarse que la economía española tardará una década en alcanzar su renta anterior a la crisis. A su vez se van a dar diferencias importantes entre CC AA. Así, aunque en 2012 se espera que todas las comunidades autónomas registren caídas en sus correspondientes PIBs estas se situarán entre el 0.7 y el 3.3% en tasas anuales medias. En 2013 también habrá grandes diferencias. Todas las comunidades registrarán tasas de decrecimiento entre el 0.2% y el 2.6%, pero mientras en doce de ellas todas las tasas trimestrales serán ya positivas, al igual que en la economía española, habrá cinco comunidades en las que tales tasas serán negativas al menos en tres trimestres.

Es importante esclarecer las contribuciones de las demandas interna y externa al decrecimiento/crecimiento del PIB en España. En efecto la demanda externa esta mitigando la caída del PIB en 2.7 y 1.8pp en las tasas anuales mencionadas para 2012 y 2013.

Las salidas de crisis anteriores siempre han sido por un empuje de la demanda externa neta propiciado por una devaluación apreciable. Hemos comentando que la recesión en España se está mitigando debido a la aportación positiva de la demanda exterior. Ello ha venido propiciado por la actividad de empresas que con anterioridad a la crisis sí que se habían preparado para afrontar los retos de la globalización y de las nuevas tecnologías. Pero esto parece insuficiente, se ha de extender a una mayor parte de las empresas en España. La única forma de lograrlo es aumentando la competitividad.

Una medida de competitividad es el coste laboral por unidad de producto, que a su vez es el cociente entre el salario medio y la productividad –cantidad de producción por trabajador. Por tanto, el aumento de la competitividad radica en aumentar la productividad de forma urgente, en una magnitud notoria y de modo generalizado en todo el tejido empresarial. Esta es la única receta segura para salir de la crisis. Los aumentos de productividad requieren con frecuencia reconversiones y cambios importantes en los sistemas de producción de las empresas que son costosos y necesitan de una financiación externa a las empresas importante. Esta financiación apenas existe actualmente. En otras ocasiones, como la reconversión de la minería, siderurgia, astilleros, etc, se ha hecho con apoyo público, pero en esta ocasión no hay dinero para ello, al menos por el momento. Es decir, la reconversión que se necesita surge en un momento en el que la economía española está muy endeudada y sin facilidad de acceso al crédito para poderla financiar. Esto pone de manifiesto con toda crudeza el problema de la economía española: corregir los desequilibrios

presupuestarios y al mismo tiempo emprender una reconversión del sistema productivo que aumente de forma notoria y generalizada la productividad del sistema. Respecto a ayudas crediticias internacionales no hay que ser por el momento muy optimista por lo que hay que prepararse para lograr la competitividad con nuestras fuerzas internas. Esto será largo y costoso, pero cuanto antes nos empeñemos en ello como sociedad, más pronto llegarán los beneficios.

El aumento de competitividad de la economía española tiene que ser rápido, por lo que si las mejoras en productividad se materializan con lentitud, un mayor índice de competitividad sólo se podrá lograr con una caída del salario medio. Es decir, la devaluación que en otras crisis venía a través del tipo de cambio, en ésta la falta de aumentos de productividad tendrá que darse con una devaluación directa de las rentas. La productividad es un concepto que tiene un amplio espectro y también se obtienen aumentos de productividad con mejoras en la calidad y diseño del producto, con los servicios de asistencia postventa, con mejores redes comercialización, etc. siempre y cuando con todo eso se pueda subir el precio más que los costes que son necesarios para implementar todas esas mejoras.

El problema planteado surge en una sociedad que se ha modernizado enormemente en los últimos treinta años, tiene buenas – aunque claramente mejorables- estructuras físicas e instituciones, mejor capital humano y mejor tejido empresarial, y está en condiciones de abordar con éxito los retos que tiene planteados. En todo lo anterior existen también deficiencias, siendo importante señalar las existentes en el sistema educativo, en la investigación, en inversión e implantación de I+D+i , en la planificación y decisión de infraestructuras y en la necesidad de una reforma administrativa que introduzca una eficiencia mucho mayor en el sistema.

Esto último no sólo requiere una coordinación apreciable entre las diferentes administraciones, sino sobre todo requiere la implantación, principalmente en la administración central pero también en las regionales y las locales, de un sistema operativo basado en objetivos con indicadores cuantitativos con los se pueda evaluar el cumplimiento de los objetivos. Es necesario también que las grandes decisiones sobre infraestructuras vengan en gran parte determinadas por criterios técnicos cuya validez esté consensuada a nivel internacional, y mucho menos con criterios políticos, que con frecuencia en el pasado han sido de nivel local y no necesariamente estatal. Estos retos son difíciles y van a requerir la cooperación firme de todos los estamentos políticos y sociales.

Sólo la falta de apreciación del riesgo de quiebra como país que corre la economía española puede explicar la falta de consenso político-social vivida en

lo que llevamos de crisis y la falta de presión social actual exigiendo a políticos y agentes sociales consensos en la política económica del país en su acepción más amplia.

Con todo lo dicho se puede apreciar que hay dos alternativas en la salida de la crisis, ambas penosas, pero una más larga e incierta que la otra. Las alternativas consisten en abordar la implementación de las medidas que hemos ido señalando a partir de un fuerte consenso político-social o sin él, como está ocurriendo en la realidad. Se puede decir que unos nuevos pactos de La Moncloa son ahora tan o más necesarios que al principio de la democracia. Se necesita pactar en temas como las medidas fiscales, las reformas estructurales, las políticas educativa, de infraestructuras, de transportes y comunicaciones, de innovación y tecnología, la reforma administrativa, etc. Pero no cualquier pacto o consenso vale. Hay que asegurar que el contenido de cada pacto es realmente el más adecuado en su campo para la mejora económica y social del país. Esto requiere que todo pacto sobre un determinado tema vaya precedido y orientado por un informe profundo de expertos e investigadores en los que se realicen recomendaciones sobre las alternativas más eficaces. Se necesita por tanto una cultura del pacto, pero es importante añadir que ha de ser del pacto informado tal como hemos descrito. Es importante que los expertos y científicos de la sociedad española tengan una participación muchísimo mayor a la actual en el planteamiento y resolución de los problemas que la sociedad afronta.

Estos pactos deben involucrar a toda la sociedad en el sentido que sean adecuadamente explicados y que así puedan ser aceptados por los ciudadanos. Aquí no nos basta con una democracia, necesitamos que la democracia se implemente con ciudadanos que han tenido acceso a información divulgativa sobre los problemas socio-económicos y sobre las medidas consensuadas y orientadas por expertos que se están tomando. Este respaldo social en las medidas para salir de la crisis puede ser decisivo para que las medidas se puedan implementar con éxito.

La necesidad de la cultura e implementación del pacto social informado puede que no se aprecie todavía, pero cuanto antes la implementamos mayores serán sus beneficios. Una razón para ello entre otras es que una sociedad con tal proceder va a generar una credibilidad muchísimo mayor en los agentes externos de los que dependemos para tener acceso al crédito. Piénsese por un momento si esta cultura del consenso social ilustrado se hubiese puesto en marcha a principios del año pasado: hubiesen aflorado con la acción de los expertos hechos y datos que están apareciendo con excesivo retraso, y con el pacto entre políticos y agentes sociales se hubiesen implementado con mayor prontitud políticas realmente eficaces.

Si esto se considera complejo de lograr en la sociedad española actual y se excluye como una alternativa real, la alternativa que queda, la de proceder sin pacto va resultar más penosa y más larga. La decisión entre ambas no sería difícil si hubiese un conocimiento y conciencia social de que la probabilidad del riesgo de quiebra de la economía española, siendo imposible de precisar, es de un valor tal que no conviene ignorar la posibilidad de quiebra. Además, actuando en una forma estructurada mediante pactos socio-políticos informados este riesgo puede desaparecer pronto.